

NORME CIRCA IL REGIME AMMINISTRATIVO
E LE QUESTIONI ECONOMICHE
DEI TRIBUNALI ECCLESIASTICI REGIONALI
E DELL'ATTIVITÀ DI PATROCINIO
SVOLTA PRESSO GLI STESSI

NORMAS SOBRE EL RÉGIMEN ADMINISTRATIVO
Y LAS CUESTIONES ECONÓMICAS
DE LOS TRIBUNALES ECLESIASTICOS REGIONALES
Y LA ACTIVIDAD DE PATROCINIO
DESARROLLADA ANTE LOS MISMOS *

* NOTA PREVIA: El día 1 de enero de 1998 entraron en vigor las Normas sobre el régimen administrativo y las cuestiones económicas de los Tribunales eclesiásticos regionales italianos, así como sobre la actividad de patrocinio desarrollada ante los mismos, promulgadas el 18 de marzo de 1997 por Decreto del Cardenal Presidente de la Conferencia Episcopal Italiana (= CEI) (cf. *Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana*, 2 [1997] 53-62).

El cuadro normativo, al introducir innovaciones de gran importancia, sugería un período de experimentación adecuada y «una primera verificación transcurrido un trienio desde su promulgación».

Las novedades significativas, referentes al régimen administrativo y a la institución de dos patronos estables en cada Tribunal, han originado inevitables dificultades e incomodidades en esta fase inicial.

Por ello, la XLIV Asamblea General de los Obispos Italianos (Roma, 19-22 de mayo de 1998) ha intervenido para aportar algunas precisiones y modificaciones a las Normas promulgadas el 18 de octubre de 1998 (cf. *Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana*, 9 [1998] 303-312). El Consejo Episcopal Permanente, considerando apropiadas las determinaciones y disposiciones ejecutivas, ha adecuado oportunamente la normativa. La Comisión Episcopal para los Problemas Jurídicos y el Departamento Nacional para los Problemas Jurídicos de la Secretaría General de la CEI han acompañado y mediado la actuación de las Normas.

Los dos años de experimentación de las nuevas disposiciones y la visita a los Tribunales regionales italianos, realizada por el director del Departamento Nacional para los Problemas Jurídicos, han puesto de manifiesto problemas, para cuya solución la Comisión Episcopal para los Problemas Jurídicos ha propuesto ulteriores modificaciones de las Normas, haciéndolas suyas el Consejo Episcopal Permanente en su sesión del 20-23 de marzo de 2000.

La XLVII Asamblea General de la Conferencia Episcopal italiana, celebrada en Collevaleza durante los días 22-26 de mayo de 2000, ha aprobado con la prescrita mayoría la deliberación conteniendo las modificaciones propuestas. La votación tuvo el siguiente resultado: votantes, 199; mayoría requerida, 167 votos equivalentes a los dos tercios de los que tienen derecho a voto deliberativo; votos favorables, 184; votos contrarios, 13; papeletas en blanco, 2.

1. *RECOGNITIO* DELLA SANTA SEDE

CONGREGATIO PRO EPISCOPIS

Prot. n. 960/83

ITALIAE

De Conferentiae Episcoporum Decreti generalis immutatione
DECRETUM

Em.mus P. D. Camillus S. R. E. Card. Ruini, Conferentiae Episcoporum Italiae Praeses, ipsius Conferentiae nomine, ab Apostolica Sede postulavit ut «Normae de re administrativa atque oeconomica in matrimonialibus processibus apud trinunalia regionalia italica», a conventu plenario Conferentiae ad normam iuris mutatae (art. 2, §§ 2, 3a; 3 §§ 1-5; 6 § 3b), rite recognoscerentur.

Congregatio pro Episcopis, vi facultatum sibi articulo 82 Constitutionis apostolicae *Pastor Bonus* tributarum et collatis consiliis cum dicasteriis, quorum interest, memoratas normas, prout in adnexo exemplari continentur, iuri canonico universali accomodatas repperit et ratas habet.

Quapropter, eadem normae, modis ac temporibus ab ipsa Conferentia statutis, promulgari poterunt.

Datum Romae ex Aedibus Congregationis pro Episcopis, die 9 mensis martii anno 2001.

IOANNES B. card. RE
Praefectus

† FRANCISCUS MONTERISI
A secretis

1. *RECOGNITIO* DE LA SANTA SEDE

CONGREGACIÓN PARA LOS OBISPOS

(Prot. n. 960/83)

DECRETO SOBRE EL CAMBIO DEL DECRETO GENERAL
DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL ITALIANA

El Emmo. P. D. Camillo S. R. E. Card. Ruini, Presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, en nombre de la misma Conferencia, pidió a la Sede Apostólica que «Las normas sobre el régimen administrativo y económico en los procesos matrimoniales ante los Tribunales regionales italianos», legítimamente modificadas por la Asamblea Plenaria de la Conferencia (arts. 2, §§ 2 y 3a; 3, §§ 1-5; y 6, § 3b) fueran reconocidas favorablemente.

La Congregación para los Obispos, en virtud de las facultades que tiene atribuidas por el artículo 82 de la Constitución apostólica *Pastor Bonus* y habiendo consultado con los dicasterios interesados, encontró acomodadas al Derecho canónico universal las citadas normas, tal como se contienen en el ejemplar anexo, por lo que las ratifica.

Por lo cual estas normas pueden promulgarse en la forma y tiempo determinados por la misma Conferencia.

Dado en Roma, en la sede de la Congregación para los Obispos, el día 9 de marzo de 2001.

JUAN B., card. RE
Prefecto

Francisco Monterisi
Secretario

El texto de las Normas ha sido comunicado por el Cardenal Presidente, Camillo Ruini, a la Santa Sede, por carta n. 785/00, del 27 de junio de 2000, la cual ha concedido la prescripta *recognitio* por el Decreto n. 960/83 de la Congregación para los Obispos, dado con fecha del 9 de marzo de 2001. Texto italiano original en: *Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana*, 3 (2001) 72-80.

NOTA DE LA REDC: Traducción de la REDC. Las normas anteriores se publicaron, en italiano y en castellano, en *REDC*, 54 (1997) 753-771. Cf. F. R. Aznar Gil-R. Román Sánchez, «El patrocinio gratuito, o asistencia jurídica gratuita, en los Tribunales eclesiásticos españoles», en *Estudios de Derecho matrimonial y procesal*, Salamanca 1999, pp. 445-48; P. Bianchi, «I Tribunali ecclesiastici regionali italiani: storia, attualità e prospettive. Le nuove norme CEI circa il regime amministrativo dei Tribunali ecclesiastici regionali italiani», en *Quaderni di Diritto ecclesiale*, 10 (1997) 393-420; L. del Giudice, «A proposito di un recente incontro sulle Norme della CEI relative ai Tribunali ecclesiastici italiani», en *Il Diritto ecclesiastico*, 109 (1998/I) 409-20; C. Gullo, «Avvocati liberi professionisti e patroni stabili nella nuova organizzazione dei Tribunali ecclesiastici italiani», en *Il Diritto ecclesiastico*, 109 (1998/I) 140-54.

2. DECRETO DI PROMULGAZIONE

CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

Prot. n. 482/01

IL PRESIDENTE
DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

PREMESSO che è trascorso il triennio di sperimentazione delle *Norme circa il regime amministrativo e le questioni economiche dei Tribunali ecclesiastici regionali nonché l'attività di patrocinio svolta presso gli stessi*, entrate in vigore il 1^o gennaio 1998;

TENUTA PRESENTE la verifica della normativa primaria e della disciplina esecutiva alla luce dell'esperienza realizzatasi presso i Tribunali ecclesiastici regionali;

CONSIDERATO che la XLVII Assemblea Generale dei Vescovi italiani svoltasi a Colleva dal 22 al 26 maggio 2000 ha approvato con la prescritta maggioranza talune modifiche delle *Norme*;

VISTA la *recognitio* concessa dalla Santa Sede con decreto della Congregazione per i Vescovi in data 9 marzo 2001 (prot. n. 960/83);

AI SENSI del canon 455 del *Codice di Diritto canonico* e dell'art. 16, § 3 dello *Statuto* della Conferenza Episcopale Italiana

EMANA IL SEGUENTE
DECRETO

Promulgo le modifiche al testo delle *Norme circa il regime amministrativo e le questioni economiche dei Tribunali ecclesiastici regionali nonché l'attività di patrocinio svolta presso gli stessi*, approvate dalla XLVII Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana e ratificate dalla Santa Sede con la prescritta *recognitio*.

Il testo integrale delle «Norme» contenente le modifiche approvate sia pubblicato nel *Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana*.

Le modifiche entrano in vigore dalla data di pubblicazione del *Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana*.

Roma, 30 marzo 2001.

CAMILLO card. RUINI

2. DECRETO DE PROMULGACIÓN

CONFERENCIA EPISCOPAL ITALIANA

(Prot. n. 482/01)

EL PRESIDENTE DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL ITALIANA

CONSIDERANDO que ha transcurrido el trienio de prueba de las *Normas sobre el régimen administrativo y las cuestiones económicas de los Tribunales eclesiásticos así como sobre la actividad de patrocinio desarrollada ante los mismos*, en vigor desde el 1 de enero de 1998;

TENIENDO PRESENTE el examen de la normativa primaria y de la disciplina ejecutiva a la luz de las experiencias realizadas ante los Tribunales eclesiásticos regionales;

CONSIDERANDO que la XLVII Asamblea General de los Obispos Italianos, celebrada en Collevalenza del 22 al 26 de mayo de 2000, ha aprobado con la mayoría prescrita algunas modificaciones de las *Normas*;

VISTA la *recognitio* concedida por la Santa Sede por Decreto de la Congregación para los Obispos, con fecha de 9 de marzo de 2001 (Prot. n. 960/83);

A TENOR del canon 455 del *Código de Derecho canónico* y del artículo 16, § 3 de los *Estatutos* de la Conferencia Episcopal Italiana

EMANA EL SIGUIENTE
DECRETO

Promulgo las modificaciones la texto de las *Normas sobre el régimen administrativo y las cuestiones económicas de los Tribunales eclesiásticos regionales así como sobre la actividad de patrocinio desarrollada ante los mismos*, aprobadas por la XLVII Asamblea General de la Conferencia Episcopal Italiana y ratificadas por la Santa Sede por la prescrita *recognitio*.

El texto íntegro de las «Normas», conteniendo las modificaciones aprobadas, se publicará en el *Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana*.

Las modificaciones entrarán en vigor a partir de la fecha de publicación del *Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana*.

Roma, 30 de marzo de 2001

CAMILLO card. RUINI

3. TESTO DELLE NORME

PREMESSA

La sollecitudine pastorale dei vescovi italiani verso i fedeli che si rivolgono ai Tribunali ecclesiastici regionali per le cause matrimoniali ha suggerito l'opportunità di statuire una più appropriata normativa. Essa ha la finalità di conferire ai Tribunali ecclesiastici regionali una configurazione più precisa e omogenea in ciò che concerne il regime amministrativo, e di venire incontro ai fedeli, rendendo il meno oneroso possibile, sotto il profilo delle spese, l'accesso ai Tribunali medesimi e facendo comunque presente l'importanza di sovvenire, anche in questa occasione, alle necessità della Chiesa.

Pertanto, la XLI Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana ha deliberato di adottare la seguente disciplina, la quale vale anche per i Tribunali del Vicariato di Roma, fatta salva, in ogni caso, la loro condizione giuridica speciale.

ART. 1

§ 1. I Tribunali ecclesiastici regionali italiani, costituiti dal papa Pio XI con il M. P. *Qua cura* dell'8 dicembre 1938, hanno come soggetto di imputazione delle posizioni e dei rapporti attinenti l'attività amministrativa e la gestione economica la Regione ecclesiastica di appartenenza, ente ecclesiastico civilmente riconosciuto.

§ 2. I Tribunali regionali godono di autonomia amministrativa e gestionale, sotto la direzione del rispettivo vicario giudiziale, il quale agisce di concerto con il moderatore e a lui risponde. Per tale motivo la Regione ecclesiastica istituisce, nel quadro del suo bilancio complessivo, un conto distinto per la contabilità riguardante l'attività del Tribunale.

§ 3. Entro un anno dalla promulgazione della presente normativa, la Conferenza episcopale regionale approva un Regolamento per il Tribunale di cui è responsabile. Il Regolamento stabilisce le disposizioni amministrative, disciplinari e procedurali necessarie per l'ordinato funzionamento del Tribunale, con speciale riferimento all'esecuzione delle presenti Norme.

ART. 2

§ 1. I Tribunali regionali sostengono gli oneri relativi alla propria attività con il concorso finanziario della Conferenza Episcopale Italiana e della Regione ecclesiastica di appartenenza, ai sensi delle presenti norme, nonché con i contributi versati dalle parti a norma del seguente art. 4.

3. TEXTO DE LAS NORMAS

PREMISA

La solicitud pastoral de los obispos italianos para con los fieles que se dirigen a los Tribunales eclesiásticos regionales para las causas matrimoniales ha sugerido la oportunidad de establecer una normativa más apropiada. Ésta tiene la finalidad de conferir a los Tribunales eclesiásticos regionales una configuración más precisa y homogénea en lo que concierne a su régimen administrativo, y de ayudar a los fieles, haciendo lo menos oneroso posible sus gastos y el acceso a los mismos Tribunales, y recordando, también en esta ocasión, la importancia de ayudar a las necesidades de la Iglesia.

Por tanto, la XLI Asamblea General de la Conferencia Episcopal Italiana ha decidido adoptar la siguiente disciplina, que vale también para los Tribunales del Vicariato de Roma, salvada, en todo caso, su condición jurídica especial.

ART. 1

§ 1. Los Tribunales eclesiásticos regionales italianos, establecidos por el papa Pío XI por el m. pr. *Qua cura* del 8 de diciembre de 1938, tienen a la Región eclesiástica de su pertenencia, ente eclesiástico civilmente reconocido, como sujeto de imputación de las posiciones y de las relaciones atinentes a su actividad administrativa y a su gestión económica.

§ 2. Los Tribunales regionales gozan de autonomía administrativa y de gestión, bajo la dirección del respectivo vicario judicial, el cual actúa de acuerdo con el moderador y ante él responde. Por tal motivo, la Región eclesiástica establece, en el cuadro de su balance global, una cuenta distinta para la contabilidad referente a la actividad del Tribunal.

§ 3. Dentro del año de la promulgación de la presente normativa, cada Conferencia Episcopal Regional aprobará un Reglamento para el Tribunal del que es responsable. El Reglamento establecerá las disposiciones administrativas, disciplinarias y procesales necesarias para el ordenado funcionamiento del Tribunal, con especial referencia a la ejecución de las presentes Normas.

ART. 2.

§ 1. Los Tribunales regionales mantienen las cargas de su propia actividad con la ayuda financiera de la Conferencia Episcopal Italiana y de la Región eclesiástica a la que pertenecen, a tenor de las presentes Normas y, además, con las aportaciones efectuadas por las partes conforme al siguiente artículo 4.

§ 2. I predetti oneri riguardano il personale addetto individuato dalle determinazioni del Consiglio Episcopale Permanente; i patroni stabili di cui al can. 1490; la manutenzione ordinaria delle sedi; l'acquisto e la manutenzione di arredi e di apparecchiature; gli altri costi generali relativi all'attività del Tribunale.

§ 3. Per i costi delle rogatorie si stabilisce:

a) se le rogatorie sono eseguite da un Tribunale diocesano, i costi delle medesime, definiti entro la misura determinata dal Consiglio Episcopale Permanente e periodicamente aggiornata dal medesimo, sono a carico del Tribunale che le richiede;

b) se le rogatorie sono eseguite da un Tribunale regionale, i costi delle medesime sono a carico del Tribunale che le esegue;

c) se le rogatorie sono eseguite da un Tribunale non italiano, i costi delle medesime sono a carico del Tribunale che le richiede.

ART. 3

§ 1. Il contributo finanziario della Conferenza Episcopale Italiana per ciascun Tribunale è determinato sulla base dello stato di previsione, presentato alla presidenza della CEI ai sensi del § 2.

§ 2. Entro il mese di febbraio di ciascun anno, il moderatore del Tribunale regionale, dopo avere informato in merito la Conferenza Episcopale Regionale, presenta alla presidenza della CEI lo stato di previsione per l'anno in corso e il rendiconto analitico e documentabile delle entrate e delle uscite registrate dal Tribunale nell'anno precedente, redatti secondo uno schema approvato dalla medesima presidenza della CEI; trasmette inoltre i dati relativi al numero delle cause di primo e secondo grado decise o perente, nonché delle nuove cause introdotte in primo e secondo grado nell'anno precedente e delle cause pendenti in primo e secondo grado al 31 dicembre dell'anno precedente.

§ 3. Entro il mese di marzo di ciascun anno, il Consiglio Episcopale Permanente determina il contributo da assegnare al Tribunale regionale con riferimento allo stato di previsione e al numero delle cause di cui al § 1.

Il versamento del contributo viene effettuato dalla presidenza della CEI sul conto di cui all'art. 1, § 2 in due rate:

— entro il mese di febbraio un acconto pari al 75% delle uscite dell'anno precedente;

— entro il mese di giugno il saldo del contributo, determinato ai sensi del § 1.

§ 4. Nel caso in cui il conto consuntivo, di cui al § 2, evidenzi un passivo, il ripianamento dello stesso —dopo verifica da parte della CEI— viene operato dalla Conferenza episcopale regionale e dalla CEI in parti uguali.

Ai fini della verifica di cui sopra, la presidenza della CEI acquisisce dal Tribunale la documentazione che ritiene necessaria per una conoscenza e una valutazione più completa degli elementi del predetto rendiconto.

§ 2. Las citadas cargas comprenden el personal adscrito especificado por las determinaciones del Consejo Episcopal Permanente; los patronos estables del canon 1490; el mantenimiento de las sedes; la adquisición y mantenimiento de muebles y utensilios; y los otros gastos generales relativos a la actividad del Tribunal.

§ 3. Para los costes de los exhortos se establece:

a) si los exhortos son efectuados por un Tribunal diocesano, los costes de los mismos, definidos dentro de la medida determinada por el Consejo Episcopal Permanente y periódicamente renovados por el mismo, son a cuenta del Tribunal que los pide;

b) si los exhortos son efectuados por un Tribunal regional, los costes de los mismos son a cuenta del Tribunal que los realiza;

c) si los exhortos son efectuados por un Tribunal no italiano, los costes de los mismos son a cuenta del Tribunal que los pide.

Art. 3

§ 1. La aportación financiera de la CEI para cada Tribunal se establece sobre la base del estado de previsión, presentado a la Presidencia de la CEI a tenor del siguiente § 2.

§ 2. En el mes de febrero de cada año, el moderador del Tribunal regional, después de haber informado con detalle a la Conferencia Episcopal Regional, presentará a la Presidencia de la CEI la previsión para el año en curso y el balance analítico y documentado de las entradas y salidas registradas por el Tribunal durante el año precedente, redactados según el modelo aprobado por la misma Presidencia de la CEI; transmitirá, además, los datos relativos al número de las causas de primera y segunda instancia decididas o perezidas, de las nuevas causas introducidas en primera y segunda instancia durante el año precedente, y de las pendientes en primera y segunda instancia al 31 de diciembre del año precedente.

§ 3. En el mes de marzo de cada año, el Consejo Episcopal Permanente determinará la aportación a asignar al Tribunal regional tomando como referencia el estado de previsión y el número de las causas del § 1.

El pago de la aportación se realizará por la Presidencia de la CEI, a la cuenta citada en el artículo 1, § 2, en dos plazos:

— en el mes de febrero una cantidad equivalente al 75 % de los gastos del año precedente;

— en el mes de junio el resto de la aportación determinada a tenor del § 1.

§ 4. En el caso de que el balance citado en el § 2 muestre un pasivo, la liquidación del mismo —después de su comprobación por la CEI— se realiza a partes iguales por la Conferencia Episcopal Regional y la CEI.

Para la comprobación de lo anterior, la Presidencia de la CEI pedirá al Tribunal la documentación que considere necesaria para un conocimiento y valoración más completos de los elementos del citado balance.

Nel deliberare sull'intervento di ripianamento, la presidenza della CEI può fornire al Tribunale interessato, previa consultazione con il suo moderatore, opportune indicazioni di gestione, cui il Tribunale medesimo è tenuto a conformarsi anche come condizione per poter accedere negli anni successivi a nuovi eventuali interventi di ripianamento.

§ 5. Spetta alla Regione ecclesiastica reperire e mettere a disposizione del Tribunale ecclesiastico regionale a titolo gratuito una sede idonea.

Le spese straordinarie concernenti la sede del Tribunale regionale, se previamente approvate dalla Conferenza Episcopale Regionale e dalla presidenza della CEI, sono rimborsate all'ente ecclesiastico proprietario dalla Conferenza regionale e dalla CEI in parti uguali.

ART. 4

§ 1. I costi di una causa sono determinati da una duplice voce:

- a) gli oneri ordinari del Tribunale;
- b) i costi aggiuntivi, quali quelli per trasferte, acquisizione di particolare materiale documentale e perizie d'ufficio, per le quali ultime si fa riferimento alla tabella stabilita dal Consiglio Episcopale Permanente.

I costi effettivi di ciascuna causa sono cumulativamente quelli del primo e quelli dell'eventuale secondo grado di giudizio presso un Tribunale regionale italiano.

Alla copertura almeno parziale dei costi effettivi di una causa le parti concorrono a norma dei §§ 2 e 3.

§ 2. La parte attrice, che invoca il ministero del Tribunale ecclesiastico, è tenuta a versare al momento della presentazione del libello un contributo di concorso ai costi della causa.

La parte convenuta è tenuta a versare un contributo di concorso ai costi della causa nel caso in cui nomini un patrono di fiducia ovvero ottenga di fruire dell'assistenza di un patrono stabile ai sensi dell'art. 6; non è tenuta ad alcuna contribuzione ove partecipi all'istruttoria senza patrocinio, anche in caso di acquisizione, su sua richiesta, di prove ammesse dal giudice.

La misura dell'uno e dell'altro contributo è determinata dal Consiglio Episcopale Permanente e periodicamente aggiornata dal medesimo.

Le parti che versano in condizioni di provata indigenza possono chiedere al preside del collegio giudicante la riduzione del predetto contributo o l'esenzione dal versamento dello stesso. La riduzione o l'esenzione vengono concesse dallo stesso preside del Collegio giudicante dopo aver acquisito gli elementi necessari per la valutazione del caso.

Al preside medesimo spetta stabilire l'eventuale rateizzazione del previsto contributo.

En su decisión sobre la intervención de la liquidación, la Presidencia de la CEI puede dar al Tribunal interesado, previa consulta con su moderador, las oportunas indicaciones de gestión a las que el mismo Tribunal está obligado a ajustarse, incluso como condición para poder acceder en los años sucesivos a nuevas y eventuales intervenciones de liquidación.

§ 5. Corresponde a la Región eclesiástica hallar y poner a disposición del Tribunal eclesiástico regional, a título gratuito, una sede idónea.

Los gastos extraordinarios relativos a la sede del Tribunal regional, si previamente han sido aprobados por la Conferencia Episcopal Regional y por la Presidencia de la CEI, son reembolsados al ente eclesiástico propietario por la Conferencia Episcopal Regional y por la CEI a partes iguales.

ART. 4

§ 1. Los costes de una causa vienen determinados por un doble concepto:

- a) las cargas ordinarias del Tribunal;
- b) los costes sobrevenidos tales como traslados, adquisición de material documental especial, y pericias de oficio a las que se hace referencia en la tabla establecida por el Consejo Episcopal Permanente.

Los costes efectivos de cada causa son, cumulativamente, los de la primera y los de la eventual segunda instancia del juicio ante un Tribunal regional italiano.

A cubrir, al menos parcialmente, los costes efectivos de una causa las partes concurrirán a tenor de lo establecido en los §§ 2 y 3.

§ 2. La parte actora, que invoca el ministerio del Tribunal eclesiástico, está obligada a depositar en el momento de la presentación de la demanda una aportación para colaborar con los costes de la causa.

La parte demandada está obligada a depositar una aportación para colaborar con los costes de la causa en el caso de que designe a un patrono de confianza o bien obtenga la asistencia de un patrono estable a tenor del artículo 6; no está obligada a ninguna aportación cuando participe en la instrucción sin patrocinio, incluso en caso de adquirir, a petición suya, pruebas admitidas por el juez.

La medida de una u otra aportación es determinada por el Consejo Episcopal Permanente y periódicamente por él actualizada.

Las partes que se encuentren en condiciones de probada indigencia pueden solicitar al presidente del Colegio judicial la reducción de la citada aportación o la exención del pago mismo. La reducción o la exención se conceden por el mismo presidente del Colegio judicial después de haber adquirido los elementos necesarios para la valoración del caso.

Corresponde al mismo presidente establecer el eventual prorrateo de la aportación prevista.

Contro la decisione del preside le parti possono presentare il ricorso al Collegio.

§ 3. Alla copertura almeno parziale del costo effettivo di una causa le parti possono liberamente contribuire secondo le loro possibilità, nelle forme previste dall'ordinamento canonico per sovvenire alle necessità della Chiesa.

A questo scopo, il preside del Collegio giudicante del Tribunale di primo grado, avuta comunicazione della pronuncia conclusiva del secondo grado di giudizio insieme con il costo della causa di tale grado, convoca le parti e comunica loro sia il costo effettivo della causa sia le modalità secondo cui è possibile effettuare detta contribuzione volontaria.

ART. 5

§ 1. Presso ogni Tribunale regionale è istituito un Elenco regionale degli avvocati e procuratori, la cui disciplina è stabilita dal Regolamento di cui all'art. 1, § 3.

Il patrocinio delle cause trattate avanti il Tribunale è riservato agli iscritti nell'elenco, nonché agli avvocati rotali.

Altri avvocati e procuratori possono assumere il patrocinio solo se iscritti in elenchi di altri Tribunali e se approvati, nei singoli casi, dal moderatore del Tribunale.

§ 2. Tutti gli avvocati e procuratori che svolgono funzioni di patrocinio presso un Tribunale regionale debbono attenersi al Regolamento del Tribunale medesimo.

§ 3. Il preside del Collegio giudicante determina, in riferimento alla tabella stabilita dal Consiglio Episcopale Permanente e periodicamente aggiornata dal medesimo, la misura degli onorari dovuti dalle parti agli avvocati e procuratori, nonché l'importo degli ulteriori compensi che non possano ritenersi compresi in tali onorari.

Tale determinazione, in primo grado di giudizio:

a) avviene a preventivo, per la parte attrice al momento dell'ammissione del libello e per la parte convenuta al momento della presentazione del mandato;

b) avviene a consuntivo al momento della conclusione della fase istruttoria, previa presentazione al preside del Collegio giudicante della distinta degli ulteriori oneri sostenuti dal patrono.

La suddetta determinazione stabilisce la somma da richiedere dal patrono alla parte a titolo di compenso definitivo.

Se il giudizio di secondo grado si svolge secondo il rito ordinario, la determinazione a preventivo avviene al momento della concordanza del dubbio di causa; se si svolge e termina con procedimento ai sensi del can. 1682, § 2, la determinazione avviene al momento della notifica del decreto di conferma della decisione di primo grado.

Contra la decisión del presidente las partes pueden presentar recurso al Colegio.

§ 3. A cubrir, al menos parcialmente, el coste efectivo de una causa las partes pueden colaborar libremente según sus posibilidades en las formas previstas por el ordenamiento canónico para subvenir a las necesidades de la Iglesia.

Con esa finalidad, el presidente del Colegio judicial del Tribunal de primera instancia, obtenida la comunicación del pronunciamiento final de la segunda instancia conjuntamente con el coste de la causa en tal instancia, convocará a las partes y les comunicará el coste efectivo de la causa, así como las formas en que se puede efectuar la citada aportación voluntaria.

ART. 5

§ 1. Ante cada Tribunal regional se ha instituido un elenco regional de abogados y procuradores, cuya disciplina se establece por el Reglamento citado en el artículo 1, § 3.

El patrocinio de las causas tratadas ante el Tribunal está reservado a los inscritos en el elenco, además de a los abogados totales.

Otros abogados y procuradores pueden asumir el patrocinio solamente si están inscritos en elencos de otros Tribunales y si son aprobados, en cada caso, por el Moderador del Tribunal.

§ 2. Todos los abogados y procuradores que desempeñan funciones de patrocinio ante un Tribunal regional deben atenerse al Reglamento del mismo Tribunal.

§ 3. El presidente del Colegio judicial determina, teniendo en cuenta la tabla establecida por el Consejo Episcopal Permanente y periódicamente actualizada por el mismo, la medida de los honorarios debidos por las partes a los abogados y procuradores, además del importe de las ulteriores compensaciones que no se pueden considerar comprendidas en tales honorarios.

Tal determinación, en la primera instancia judicial:

a) se hace efectiva provisionalmente por la parte actora en el momento de la admisión de la demanda y por la parte demandada en el momento de la presentación del mandato;

b) se hace efectiva definitivamente en el momento de la conclusión de la fase instructoria, previa presentación al presidente del Colegio judicial de la relación de las ulteriores cargas sostenidas por el patrono.

La citada determinación establece la suma a exigir por el patrono a la parte a título de compensación definitiva,

Si la segunda instancia se desarrolla según el proceso ordinario, la determinación provisional se hace efectiva en el momento de la concordancia del dubio de la causa; si se desarrolla y termina con el procedimiento previsto en el canon 1682, § 2, la determinación se hace efectiva en el momento de la notificación del decreto de confirmación de la decisión de la primera instancia.

§ 4. Il preside del Collegio informa le parti di quanto dovuto ai sensi del paragrafo precedente. In particolare, della informazione preventiva viene redatto apposito documento che, sottoscritto dalle parti interessate, dagli avvocati e procuratori nonché dal preside del Collegio, è conservato negli atti di causa.

§ 5. Eventuali reclami delle parti contro l'operato degli avvocati e dei procuratori circa i costi del patrocinio debbono essere presentati al preside del Collegio giudicante. Questi, sentiti gli interessati, se riscontra che il reclamo ha fondamento, deferisce la questione al Moderatore del Tribunale per gli opporturi provvedimenti.

§ 6. Gli avvocati e i procuratori iscritti all'elenco di un Tribunale regionale sono tenuti, a turno, a richiesta del Vicario giudiziale e a meno di gravi ragioni la cui valutazione spetta al medesimo vicario giudiziale, a prestare il proprio gratuito patrocinio alle parti che abbiano ottenuto la completa esenzione dal contributo obbligatorio ai costi di causa e dalle spese di patrocinio e alle quali il preside del Collegio giudicante abbia ritenuto doversi assegnare un patrono d'ufficio.

Gli avvocati e i procuratori che assistono un fedele del tutto gratuitamente su richiesta del vicario giudiziale possono chiedere al Tribunale il rimborso delle spese vive sostenute per il loro lavoro, previa presentazione di distinta documentabile delle spese stesse.

ART. 6

§ 1. L'organico del Tribunale regionale deve prevedere l'istituzione di almeno due patroni stabili ai sensi del can. 1490. Essi esercitano il compito sia di avvocato sia di procuratore.

L'incarico di patroni stabili deve essere conferito a persone che, secondo le qualifiche richieste dal can. 1483, offrano garanzia di poter efficacemente svolgere il loro compito a favore dei fedeli.

Spetta alla presidenza della CEI dare ulteriori determinazioni circa i requisiti e i criteri per l'affidamento dell'incarico, la natura del rapporto con il Tribunale e le modalità di esercizio dell'attività.

L'assunzione del predetto incarico è ragione di incompatibilità con l'esercizio del patrocinio di fiducia presso i Tribunali regionali italiani.

§ 2. A tali patroni stabili i fedeli possono rivolgersi per ottenere consulenza canonica circa la loro situazione matrimoniale e per avvalersi del loro patrocinio avanti il Tribunale regionale presso il quale prestano il loro servizio.

Il servizio di consulenza avviene secondo i tempi e le modalità previsti dal Regolamento del Tribunale.

Per potersi avvalere del patrocinio di un patrono stabile, la parte che ne abbia interesse deve fame richiesta scritta e motivata al preside del Collegio giudicante. Questi accoglie la richiesta tenuto conto delle ragioni addotte e delle effettive disponibilità del servizio.

§ 4. El presidente del Colegio informará a las partes de lo que deben a tenor del párrafo precedente. En particular, redactará un documento expreso de la información previa que, firmado por las partes interesadas, los abogados y procuradores y también por el presidente del Colegio, se conservará en las actas de la causa.

§ 5. Eventuales reclamaciones de las partes contra el proceder de los abogados y de los procuradores acerca de los costes del patrocinio se deben presentar al presidente del Colegio judicial. Éste, oídos los interesados, si encuentra que la reclamación tiene fundamento, remite la cuestión al moderador del Tribunal para las oportunas medidas.

§ 6. Los abogados y procuradores inscritos en el elenco de un Tribunal regional están obligados, a turno, a petición del vicario judicial y salvo por graves razones cuya valoración pertenece al mismo vicario judicial, a prestar el propio patrocinio gratuito a las partes que hayan obtenido la completa exención de la aportación obligatoria a los costes de la causa y a los gastos de patrocinio, y a las que el presidente del Colegio judicial haya decidido asignarles un patrono de oficio.

Los abogados y los procuradores que asistan a un fiel de forma completamente gratuita a petición del vicario judicial, pueden solicitar al Tribunal el reembolso de los gastos originados por su trabajo, previa presentación de la distinta documentación de los mismos gastos.

ART. 6

§ 1. La organización del Tribunal regional debe prever la institución de, al menos, dos patronos estables según lo establecido en el canon 1490. Éstos desempeñan las tareas de abogado y de procurador.

El cargo de patrono estable debe ser conferido a personas que, según los requisitos del canon 1483, ofrezcan garantías de poder desarrollar eficazmente su trabajo en favor de los fieles.

Corresponde a la presidencia de la CEI dar ulteriores determinaciones sobre los requisitos y criterios para el otorgamiento del cargo, la naturaleza de la relación con el Tribunal y la forma de ejercicio de la actividad.

La asunción del citado cargo es motivo de incompatibilidad con el ejercicio del patrocinio de confianza ante los Tribunales regionales italianos.

§ 2. Los fieles pueden dirigirse a estos patronos estables para consultar canónicamente sobre su situación matrimonial y para valerse de su patrocinio ante el Tribunal regional en el que prestan su servicio.

El servicio de consulta se realiza en los tiempos y formas previstos por el Reglamento del Tribunal.

Para poderse servir del patrocinio de un patrono estable, la parte interesada en ello debe dirigir una petición escrita y motivada al presidente del Colegio judicial. Éste acogerá la petición, teniendo en cuenta las razones aducidas y las efectivas disponibilidades del servicio.

§ 3. Il patrono stabile non riceve alcun compenso dai fedeli, né per la consulenza, né per il patrocinio o la rappresentanza in giudizio.

Alla retribuzione dei patroni stabili provvede il Tribunale, attingendo dalle risorse messe a disposizione dalla CEI e alle condizioni stabilite dalla medesima, fatte salve eventuali diverse determinazioni.

§ 4. Il patrono stabile può non accettare l'incarico per una determinata causa ovvero rinunciare in corso di causa all'incarico assunto, se legittimamente impedito o se ritenga, in scienza e coscienza, di non poter continuare a svolgerlo.

§ 3. El patrono estable no recibe ninguna compensación de los fieles ni por la consulta, ni por el patrocinio o la representación en el proceso.

El Tribunal provee a la retribución de los patronos estables teniendo en cuenta los recursos puestos a disposición por la CEI y las condiciones establecidas por la misma, salvadas eventuales determinaciones diversas.

§ 4. El patrono estable puede no aceptar el encargo para una determinada causa, o bien renunciar durante el transcurso de la causa al encargo asumido, si está legítimamente impedido o si considera, en ciencia y conciencia, que no puede continuar desempeñándolo.